

Crónica del mes

Enero-febrero

Los dos primeros meses del año, como no podía ser para menos, estuvieron dominados por los dinamismos políticos propios de la coyuntura electoral que se ha abierto formalmente en el país desde inicios de 1997. No cabe duda de que, desde las esferas de poder gubernamental, el año nuevo se inició con el discurso que el presidente Armando Calderón dirigió a la nación el 1 de enero, y en el cual hizo una evaluación del desempeño de su gobierno luego de dos años y medio de gestión. Al discurso presidencial siguió, días después, el inicio formal de la campaña electoral para la elección de alcaldes y diputados del 16 de marzo, y con ella, el desarrollo de un contexto en el que todo adquirió color político: por un lado, las discusiones sobre la gasificadora y los negocios de tragamonedas, en los cuales se vio involucrado el alcalde de San Salvador y candidato a reelección para el mismo cargo por ARENA, Mario Valiente; por el otro, el descubrimiento de un buzón de armas en Nicaragua y el presunto manejo ilícito de recursos de determinadas organizaciones no gubernamentales, seguido de un debate acerca de la responsabilidad del FMLN. Por último, en el ámbito de la seguridad pública, se realizaron cambios al interior de la Policía Nacional Civil, lo que añadió nuevos elementos al debate político social.

Enero arrancó con el discurso presidencial, que tuvo cinco apartados: político, jurídico, económico, social e institucional. En el primero de ellos, el mandatario volvió una vez más sobre los acuerdos de paz, insistiendo en que ya están cumplidos. En este punto, no olvidó el tema de la "profundización del modelo democrático", cuyo logro más relevante es que "hemos llegado a conformar una sociedad con un alto grado de libertad". Ni una palabra sobre la olvidada reforma económica ni sobre los conflictos potenciales que su posterga-

ción puede encerrar, ni sobre el bloqueo empresarial a la instauración del Foro de Concertación Económico Social ni, menos aún, sobre la incompetencia gubernamental para contener la voracidad empresarial.

A nivel jurídico, señaló que lo más importante era el "fortalecimiento del Estado de derecho", que requería "hacer de la Policía Nacional Civil una institución que verdaderamente proteja a la población, con estricto apego a las leyes". ¿Cómo se ha logrado esto? Según, Calderón, aumentando el número de efectivos policiales, enfrentando drásticamente a la delincuencia y cumpliendo los compromisos internacionales en el campo del respeto a los derechos humanos. Sobre este último punto las dudas sobran, puesto que las obreras en las maquilas o los niños de la calle —cuyos derechos han sido y son violentados cotidianamente sin que el Estado haga algo para defenderlos— ponen de manifiesto la debilidad del discurso presidencial.

Pero si con la bandera de los derechos humanos el gobierno no queda en buen pie, le va peor cuando asocia el fortalecimiento del Estado de derecho con el crecimiento de la Policía Nacional Civil y con la eficacia de su lucha contra la delincuencia. La policía puede crecer y ser eficaz en el combate de la delincuencia pero de ello no se sigue, ni de lejos, un fortalecimiento del Estado de derecho. Los excesos de violencia que han caracterizado a la Policía Nacional Civil, así como la presumible existencia de organismos paralelos en su interior, hacen sospechar de su vocación democrática.

Sobre la situación económica, el presidente Calderón, tras tener un atisbo de sinceridad —al reconocer que 1996 "fue un año difícil, ya que

hemos sufrido un periodo de desaceleración”— volvió a uno de los lugares comunes de las valoraciones oficiales: “a pesar de la desaceleración, la economía creció 3 por ciento en 1996, y todos los indicadores económicos muestran resultados positivos”. Por supuesto, no podía faltar la alusión al ejemplo por excelencia de la bonanza económica nacional: el sistema financiero, de cuya fortaleza —según el ciudadano presidente— debemos sentirnos orgullosos todos los salvadoreños, “los trabajadores, los campesinos y los empresarios”. Esto último es hasta risible porque ni los trabajadores ni los campesinos tienen razones para enorgullecerse de un modelo económico que los hunde en la miseria; también lo es porque los grupos empresariales no se han beneficiado en conjunto y por igual de los logros económicos, como lo han puesto en evidencia las protestas y presiones de los agricultores y los industriales.

En el campo social, los éxitos de los que hizo alarde el mandatario se ubican únicamente en el sector educativo. Indudablemente en esta área sí se puede hablar de un desempeño encomiable de parte una instancia estatal, lo cual dice mucho del trabajo y de la capacidad de la Ministra de Educación, sin cuyo empeño la reforma educativa no hubiera visto la luz. Justamente la experiencia del Ministerio de Educación es la excepción que confirma la regla de un desempeño gubernamental francamente ineficiente a lo largo de 1996.

En otro apartado de su discurso, el presidente habló de la “transformación institucional”, aludiendo a una reforma del sector público que “satisfaga las demandas de una sociedad libre, participativa y solidaria”. Pese a la opinión del jefe del ejecutivo, la reforma del sector público no se ha encaminado a satisfacer las demandas de la sociedad, sino más bien traducido en desempleo —como lo muestra la aplicación del decreto 471— y en un encarecimiento creciente de los servicios básicos.

Por último, no podía faltar en el discurso presidencial la visión hacia el futuro, un futuro “con expectativas favorables”, pues en los principales ámbitos de la realidad económica social las perspectivas son favorables, y sus frutos comenzarán a percibirse en 1997, “en beneficio de todo el país, que se encamina hacia la modernización”. Siendo así las cosas, “es importante dejar de escuchar al pesimismo, que sólo pretende ver lo malo y no quiere reconocer las virtudes, el esfuerzo y trabajo

que día a día realizan los salvadoreños, trabajadores, campesinos y empresarios, de los que saben crear riqueza, empleos y bienestar”.

En otro orden, el optimismo de Calderón respecto del avance democratizador del país pronto encontró su contrapunto en la campaña electoral que, pocos días después del discurso presidencial, fue formalmente declarada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En efecto, el 14, este informó que los partidos políticos y coaliciones contendientes iniciarían, al día siguiente, la promoción de los programas políticos y de los distintos candidatos a diputados. El presidente del organismo electoral, Jorge Díaz, no sólo formuló un llamado a los dirigentes políticos para mantener una campaña de altura en la que se respeten las disposiciones del Código Electoral, así como su reglamento, sino que advirtió de que las sanciones por violar el reglamento consisten en multas que van desde mil hasta 50 mil colones o, incluso, la cancelación del partido que utilice recursos del Estado para fines propagandísticos.

Curiosamente, las dos mayores fuerzas políticas del país adoptaron el mismo *slogan* publicitario: ARENA y al FMLN ofrecieron “el cambio”. Lo que no quedó muy claro en un principio era a qué tipo de cambio se refería cada uno de los contendientes. Poco después se evidente que el “cambio” ofrecido por ARENA era más de lo mismo, es decir, la continuación del programa de gobierno de sus gobiernos anteriores. Mientras, por el lado del FMLN, el “cambio” consistía en revertir algunas de las medidas impulsadas por aquel programa: disminución del impuesto al valor agregado y reversión del proceso de privatización. Por supuesto, las dudas sobre la operatividad de las promesas del partido de izquierda no se hicieron esperar, pues una de las inconsistencias de la propuesta residía en la falta de claridad respecto a la manera concreta de llevar a cabo los cambios ofrecidos. Cómo se solventaría la disminución del impuesto al valor agregado para cubrir las demandas de un “Estado benefactor” y cómo se reenfojaría la privatización, a la luz de la política internacional actual, fueron algunas de las interrogantes obligatorias.

Además, ARENA y el FMLN se enredaron en una polémica en la cual salieron a relucir, tanto una presunta malversación de recursos estatales por parte del primero, como un presunto ataque a sus simpatizantes de parte de militantes del segun-

do. Sobre la presumible malversación de recursos estatales, el FMLN presentó ante el Tribunal Supremo Electoral, el 14 de enero, una demanda en contra de ARENA, que habría utilizado recursos del Estado en actividades proselitistas. En su demanda el partido de izquierda hizo referencia a la convención arenera del 12 de enero, cuyo objetivo era oficializar la designación de alcaldes y diputados para las próximas elecciones. "En dicho acto político ARENA utilizó entre otros recursos, gran cantidad de vehículos nacionales para trasladar a sus correligionarios, hechos que hicieron notar los medios de comunicación social", denunció Facundo Guardado, secretario de asuntos jurídicos y representante legal del FMLN. "El utilizar los recursos del estado —afirmó Guardado— es una práctica que utiliza ARENA en forma constante durante los períodos electorales, aprovechando su calidad de partido en el gobierno, ya que igual utilización de recursos han hecho en diferentes convenciones municipales, con la diferencia que en dichos lugares no asisten los medios de comunicación y el hecho pasa desapercibido".

En lo que se refiere al presunto ataque de activistas del FMLN a miembros de ARENA, el 16, este último partido denunció al partido de izquierda por la lluvia de piedras de la que fueron objeto sus candidatos a diputados en Nejapa, municipio de San Salvador, dejando como saldo un menor herido de gravedad y vidrios rotos en varios autos que integraban la caravana. La situación habría llevado a que los candidatos a diputados del partido de gobierno se reunieran el mismo día del incidente para analizar los logros y dificultades del inicio de la campaña electoral; como resultado habría surgido la idea de iniciar conversaciones con los líderes de los demás partidos políticos para comprometerse a desarrollar una campaña de altura basada en el respeto recíproco.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral, en un intento por corregir las anomalías de la campaña electoral, preparó el terreno para que los partidos políticos firmaran un "pacto de caballeros". El pacto, sin embargo, encontró reparos en ARENA, que, el 20, demandó al organismo electoral que suprimiera de la redacción del documento la frase "cumplir la ley y el Reglamento", como condición para firmarlo en la reunión programada para el día 24. "Solamente así estaremos acompañando el pacto, ya que si se firma el documento con esta frase es como aceptar que los partidos actúan al

margen de la ley, cuando se presume que la intención del tribunal es que exista el compromiso de una campaña de altura, educativa y basada en el respeto de la persona", resumió Walter Araujo, miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA. Mientras tanto, el mismo día, el diputado del FMLN, Orlando Quinteros, afirmó que su partido no firmaría nada, hasta que el tribunal no resolviera el caso de los autos oficiales asignados a funcionarios que habrían sido utilizados durante la Asamblea General de ARENA. "Estamos interesados en una campaña de altura y que todos los candidatos participen con las manos limpias, con igualdad jurídica, específicamente que ARENA no use bienes del Estado", indicó Quinteros. Por su parte, el coordinador general del Movimiento Auténtico Social, Luis Gómez Zárate, externó su disposición a firmar el documento, si bien advirtiendo que tiene un proceso abierto en contra del presidente del Partido Liberal Democrático, Kirio Waldo Salgado, que impediría mayores acercamientos durante la campaña.

Volviendo a la oferta de cambio propuesta por ARENA, se vio recubierta por la dosis de confusión que trajo consigo la incorporación de varios de sus miembros a las filas del Partido de Conciliación Nacional. En efecto, el 5 de enero, Francisco Merino, Sigifredo Ochoa Pérez y Manuel Gutiérrez Castro hicieron pública su nueva militancia partidaria. Posteriormente, la situación dio visos de volverse más aguda cuando, el 21, el concejo municipal de Ciudad Delgado en pleno y otros ex miembros de ARENA decidieron, por desacuerdos con el partido oficial, incorporarse también al Partido de Conciliación Nacional. De ese modo, el secretario general del Partido de Conciliación Nacional, Ciro Cruz Zepeda, juramentó a Mario Cerrato, a José Guillermo Machón Coreas, ambos ex diputados areneros en la anterior Asamblea Legislativa; y a Francisco Sansivirini, ex delegado departamental, así como a los miembros de los concejos municipales de La Reina y San Ignacio, del departamento de Chalatenango. Por su parte, Sigifredo Ochoa Pérez confirmó su nominación como primer candidato a diputado por el departamento de Cabañas, mientras que el ex vicepresidente de la república, Francisco Merino, explicó que si algunos diputados oficialistas no habían desertado de ARENA era porque, a pesar de no ser postulados para un segundo período, les habían ofrecido puestos públicos luego de las elecciones.

El mismo día, ante la insistencia de rumores que hacían creer lo contrario, el ex presidente de la república, Alfredo Cristiani, reiteró a la prensa que no estaba entre sus planes una renuncia al partido ARENA. "Sigo siendo miembro de ARENA, voy a seguir dentro del partido, voy a trabajar con él y con los candidatos", expresó Cristiani, al tiempo que explicó que su ausencia en la asamblea general del partido se debió a un viaje de negocios a Japón. "Los únicos que pueden contestar por qué se han cambiado de bandera política son los que se cambian, cada quien en su conciencia sabrá por qué hace eso", enfatizó.

En resumen, en enero, el proselitismo político envolvió el conjunto de la vida nacional a través de los diversos medios de comunicación —radio, prensa y televisión— así como a través de la presencia partidaria en distintos zonas del país —a través de mítines, pancartas, caravanas, etc. La mayor parte de los demás partidos políticos no tardaron en manifestarse propagandísticamente, invirtiendo notorios esfuerzos y recursos en su promoción. ARENA y el FMLN sobresalieron de manera evidente en este aspecto; mientras, los partidos restantes con dificultades, precariedades e ingenuidad llevaron adelante su lucha por hacerse notar. Sin embargo, su evidente desventaja respecto de "los grandes" puede repercutir en una disminución sensible de votos y, en consecuencia, en las posibilidades de su supervivencia política. De este modo, durante las primeras semanas de campaña proselitista lo más notorio fue la falta de propuestas claras, que apegadas a la realidad intentarían responder a la difícil situación del país. El tono festivo que adquirió la campaña, especialmente en la publicidad de ARENA, tendió a aislar el proceso electoral de los problemas con que cotidianamente se enfrenta la ciudadanía. Es decir, la campaña se perfiló como una "fiesta" vacía de contenidos políticos reales, lo cual el Tribunal Supremo Electoral no se preocupó por corregir, ya que su interés se enfocó más hacia los aspectos formales.

Por otra parte, más allá de la ruptura entre la propaganda electoral y los problemas reales del país, otra característica del proceso político durante el primer mes del año fue la tendencia hacia la "polarización" de la competencia partidaria, que se decantó en torno a dos opciones: la primera, ARENA, un partido escasamente democrático, como lo demuestra su estructura interna, y con

poco interés de democratizar su quehacer político, como se vio reflejado cotidianamente en su propaganda; la segunda, el FMLN, que afirmó estar a favor de los intereses del pueblo y que, sin embargo, no aclaró los pasos concretos que habría de dar para hacer realidad las promesas que con tanta contundencia ofrecía.

En suma, esta tendencia a la polarización resulta, sin duda, favorable para los partidos mayoritarios y desfavorable para la democracia. En primer lugar, porque elimina del panorama político a los posibles "rivales peligrosos", en detrimento de los intereses de las minorías; en segundo lugar, porque posibilita a los partidos aventajados basar su campaña en la competencia —muchas veces desleal— en contra del opositor, permitiendo así que el proceso electoral se convierta más en una "guerra publicitaria" que en una serie de ofertas serias. Así las cosas, la campaña electoral se facilita en gran medida para los partidos con mayores posibilidades, pero el precio de esa facilidad lo paga caro la democracia ya que el electorado estará votando, no por la oferta política que más le convenga, sino por el partido que cuente con más recursos para promocionarse.

Mientras, en el ámbito social, al menos desde unos ocho meses atrás, cobró gran relevancia —por la ola de críticas y contracríticas que ha generado— el proyecto de instalación de una planta gasificadora de basura en la zona de Apopa, propuesto e impulsado por el alcalde de San Salvador, Mario Valiente. Hasta enero, la discusión se empañó en los aspectos técnicos, sin que ninguna de las partes involucradas apelara a un estudio científicamente concluyente y veraz; ello permitió que se obviara el aspecto político de la cuestión que, en definitiva, fue determinante en la problemática.

¿Cómo fue posible que el proyecto en discusión llegara a ser punto de prioridad en la agenda política del país? La justificación esgrimida por sus defensores —por supuesto, Mario Valiente, secundado por la fracción legislativa de ARENA— partió del reconocimiento de la crisis ecológica por la que atraviesa el área metropolitana de San Salvador como resultado del caudal de basura que produce (unas 1,500 toneladas diarias). La gravedad de la crisis obligaría a buscar medidas alternativas para el tratamiento de los desechos. En este sentido, según sus defensores, la instalación de la gasificadora no sólo saldaría de una vez por todas

el problema, sino que, como beneficio extra, generaría a la vez 30 megavatios de energía eléctrica, suficientes para cubrir el servicio eléctrico de 300 mil capitalinos.

Para los detractores del proyecto —organizaciones ambientalistas no gubernamentales y diputados del FMLN—, la gasificadora se convertiría en un foco grave de contaminación tóxica, por lo que su instalación complicaría aún más el problema que se pretende solucionar. Para sustentar su oposición, éstos acudieron a la opinión de personalidades internacionales —como el diputado al gran concejo de Ginebra, Max Schneider— y a la crítica minuciosa de los documentos técnicos presentados por la *Continental Waste Conversion Inc.*, para avalar la construcción y operación de la gasificadora.

Unos y otros se enfrascaron en una confusa argumentación técnica, en la que el desconocimiento y las contradicciones estuvieron a la orden del día. Sin embargo, lo que en última instancia permitió que el proyecto se defendiese contra viento y marea no fue la preocupación por el medio ambiente de San Salvador, sino más bien el prestigio y credibilidad de un funcionario arenero en busca de su segunda reelección, precisamente aquel que había hecho de la gasificadora una de sus principales bazas.

Antes de intentar llevar a cabo el proyecto, Mario Valiente venía de fracasar estrepitosamente en dos de los planes que al comienzo de sus funciones había prometido concretar: el Parque de los Pericos y la construcción de un metro en la capital. En el intento de hacer realidad el primero, Valiente se vio vencido por la cerrada oposición de las organizaciones ambientalistas que veían en el parque una amenaza a la reserva ecológica de El Espino, además de la negativa de los colonos de la finca a trasladarse a otros asentamientos. Con respecto al segundo plan, la inversión millonaria que habría sido necesaria para la construcción del metro se irguió como un valladar insalvable. La ilusión de Valiente de que el Estado pudiera incurrir en préstamos cercanos a los 200 millones de dólares para la realización de su proyecto desapareció rápidamente ante urgencias económicas más importantes.

Es así como en el proyecto de la gasificadora Valiente se jugó su tercera y última carta. Si se considera que la posibilidad de su postulación

como alcalde para un segundo período había sido ya planeada con mucha anterioridad por ARENA y si se tiene en cuenta que presentar a Valiente como un alcalde decidido y que cumple sus promesas era —y es— de vital importancia para tratar de acceder de nuevo a una posición estratégica en la administración gubernamental, es perfectamente comprensible que la gasificadora se volviera punto de honor. Asimismo, quedó en evidencia el oportunismo político de un partido que no duda en utilizar para su provecho cualquier valor o necesidad pública. Si realmente existe un interés por el medio ambiente ¿por qué no se ha acudido a realizar campañas de educación para el reciclamiento de la basura o por qué no se ha sancionado a las empresas que con sus desechos contaminan los ríos, los mantos acuíferos y la tierra? Es indudable que la solución ambiental será tan objetiva cuanto menos sean los intereses políticos que medien en ella; será tan adecuada cuanto menos apresurada y superficial. En este caso, tal como todo lo indica, se sigue el camino contrario.

Pero, iniciado el nuevo año, la polémica en torno a la gasificadora no fue lo único que manchó la imagen del alcalde de San Salvador. A ello se sumó la engorrosa situación que siguió a la ofensiva policial contra los negocios de tragamonedas autorizados por el mismo Mario Valiente. El 22 de enero, la Policía Nacional Civil y la fiscalía, apoyadas por el “enérgico respaldo” del presidente Armando Calderón, procedieron a decomisar 100 máquinas tragamonedas del negocio *Izalco's Video* que contaba con un permiso de operación firmado por Valiente, el 23 de octubre de 1996.

A raíz del escándalo generado por la confiscación de las máquinas de azar, y pese a que poseían el visto bueno del edil, el FMLN afirmó tener conocimiento de que el Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) había solicitado a Valiente renunciar a su reelección. Como respuesta, el COENA declaró que Valiente, al contrario de lo dicho por el FMLN, contaba con todo el apoyo del partido y de las bases. Empero, ¿por qué, si Mario Valiente tenía el apoyo de su institución política, el presidente de la república dio declaraciones que no podrían interpretarse más que como muestra de todo lo contrario? ¿Por qué no se manejó ese asunto mediante el uso del silencio oficial y el apoyo incondicional al funcionario en aprietos, como ya es acostumbre?

En fin, dejando de lado las rutinarias polémi-

cas políticas al interior de ARENA, lo que finalmente interesa resaltar es la capacidad del ejecutivo de vetar los proyectos de las alcaldías cuando estos sobrepasan sus expectativas o atentan contra sus intereses coyunturales. No deja de surgir la pregunta de qué pasaría si algún partido de la oposición gana la Alcaldía de San Salvador. ¿Cuáles serían las posibilidades de implementar sus proyectos y metas frente a la amenaza perenne del veto de la presidencia? Si, por ejemplo, lo que en última instancia llevó a que el proyecto de la gasificadora no se concretizara fue el interés de no perder puntos en las simpatías del electorado, qué cosa impediría que los obstáculos puestos por el ejecutivo no fueran insalvables para una administración edilicia de oposición. Si se tiene en cuenta que la alcaldía de San Salvador puede y es utilizada como un trampolín para acceder a mayores cuotas de poder dentro del Estado, no será nada sorprendente que, para desgracia de los ciudadanos y para beneficio del partido en el poder, ella sea inutilizada o potenciada en correlación con el color del funcionario que la maneja.

En el terreno de la seguridad pública, el 7, el Viceministro de Seguridad, Alberto Carranza, informó de una evaluación de mandos en la Policía Nacional Civil, con el objeto de mejorar la eficiencia de la institución. Según Carranza, la evaluación fue dirigida por la dirección general de la policía, que ya habría entregado los primeros resultados al presidente Calderón, quien tendría en definitiva la última palabra sobre si se realizarían o no cambios en los puestos, delegaciones, subdelegaciones y divisiones de la institución policial.

El 13, el subdirector de operaciones de la policía, Rolando García Herrera, anunció cambios en las jefaturas de las distintas divisiones y delegaciones para los próximos días. Según informó García, los cambios obedecen a que la corporación debe "renovarse" y fortalecerse en la lucha contra la delincuencia. Aunque no detalló los nombres de los jefes de las unidades policiales que enfrentarían "cambios de destino", García Herrera dejó entrever que la división de finanzas y las delegaciones de Soyapango y Centro estarían incluidas en el proceso. "Nos encontramos finalizando la evaluación de las jefaturas de la policía para medir la efectividad de cada uno de los mandos y de esta manera verificar el nivel de conducción de cada uno de los jefes", explicó el funcionario. Asimismo, recalcó que la corporación pretende que cada

jefe policial permanezca el mayor tiempo en la unidad o división a la que ha sido asignado. Además, reveló que la falta de mandos superiores muchas veces obliga a que los cambios no se lleven a cabo. "Aunque hayan nuevos mandos, no podemos asignarlos a ciertos puestos, debido a que estos no han acumulado experiencia en el campo y eso es necesario", expresó.

El 20, el director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Avila, aseguró que los cambios de jefaturas al interior del cuerpo policial serían efectivos a partir de febrero, pero desistió de adelantar tales nombramientos por respeto al personal que sería trasladado. El jefe policial no sólo explicó que habría una orden general de nombramientos de las jefaturas en las divisiones y delegaciones de la policía, sino que calificó los cambios de "rutinarios" y "normales" dentro de la institución policial. Avila no confirmó ni desmintió el posible nombramiento del subcomisionado Ricardo Meneses como subdirector de operaciones, en sustitución de García Herrera. "Si ese cambio se llega a dar, nos tenemos que apegar a la misma Ley de la Carrera Policial, la que nos orienta de que algunos puestos operativos vayan siendo ocupados por personal con carrera policial", afirmó.

El 29, Rolando García Herrera informó de su renuncia al cargo a partir del 1 de febrero de 1997, como parte de los cambios rutinarios que se habían anunciado ampliamente dentro del cuerpo de seguridad. La renuncia de García Herrera fue divulgada públicamente el 23 de enero por la coordinadora de comunicaciones de la policía, a través de un comunicado en el que se sostiene que la dimisión de García Herrera "obedece a los traslados rutinarios de los funcionarios que se desempeñan en las jefaturas de la Policía".

Por último, el mismo día, el inspector general de la policía, Víctor Valle, mostró su inconformidad porque las autoridades de la institución no le tomaron en cuenta para la elaboración de la orden de cambios. Valle cuestionó que, al trasladar al personal, no se tomara en consideración su opinión, pues el inspector "es la figura que está llamada a evaluar procedimientos y actuaciones personales". "Resulta obvio sugerir que para los movimientos de personal se considere la opinión del inspector general, puesto que es la figura que está llamada a evaluar procedimientos y actuaciones de los agentes policiales", recalcó.

En febrero, la dinámica político electoral conti-

nuó dominando sobre el conjunto de la vida nacional. La medianoche del día 14 dio inicio, con la celebración de múltiples mítines, la campaña proselitista para la elección de alcaldes y concejales a nivel nacional. El 15, el alcalde de San Salvador, Mario Valiente, sólo sostuvo una reunión con diversos sectores de la sociedad y realizó un acto público en la colonia Costa Rica. Por su parte, Héctor Silva, postulado por la coalición Convergencia Democrática-Movimiento de Unidad-FMLN hizo su actividad en el interior del mercado San Miguelito, donde expuso a las vendedoras el plan de trabajo que implementará de resultar ganador. Mientras, los demás institutos políticos realizaron caravanas de carros, exponiendo al público fotografías de sus candidatos. En cada uno de los mítines, distintos partidos pusieron a disposición de los presentes música de mariachis, conjuntos y discotecas móviles.

A partir de este momento, y como era de esperarse, la atención pública y el esfuerzo de los partidos políticos se centró especialmente en la carrera por la posesión de la alcaldía más grande e importante: la de San Salvador. A diferencia de la campaña para la elección de diputados, aquella se caracterizó por una disminución significativa del nivel de confrontación entre los partidos en pugna por el poder, es decir, por un desplazamiento del ataque personalizado entre los candidatos hacia un esfuerzo por presentar seriamente las plataformas y propuestas políticas.

Asimismo, un aspecto que merece ser destacado en la campaña por las alcaldías es el esfuerzo de algunos partidos por presentar como candidatos edilicios a personajes no directamente vinculados con la política, provenientes de distintas ramas profesionales. El ejemplo más palmario es el equipo que representará a la coalición FMLN-Convergencia Democrática-Movimiento de Unidad en las elecciones para alcaldes; tanto el candidato a alcalde por la coalición, Héctor Silva, como el equipo que le acompaña son figuras nuevas en el sistema político salvadoreño, que por su novedad en política y por su diversidad profesional podrían generar más confianza y simpatías en el electorado.

Por otra parte, las encuestas de opinión pública pusieron una nota adicional de interés a la coyuntura electoral. Hasta la segunda quincena de febrero habían salido a la luz los resultados de cuatro encuestas de opinión pública. Los resultados llenaron de optimismo y satisfacción a los partidos de

la oposición, y ensombrecieron el semblante de los candidatos del partido ARENA. Por primera vez en cinco años, firmas encuestadoras disímiles entre sí mostraron que, según los sondeos de opinión pública, los candidatos preferidos para la elección de alcaldes y diputados no pertenecían al partido ARENA: tanto la encuesta de la CID-Gallup —criticada en anteriores ocasiones por su tendencia a beneficiar al partido en el poder—, como la del Centro de Estudios sobre Problemas Públicos —firma mexicana contratada por el FMLN—, la del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) y la de la Universidad Tecnológica, señalaron que, de seguir con la tendencia observada, la coalición de la oposición tendría posibilidades de obtener la victoria en las elecciones del 16 de marzo.

Aunque las diferencias porcentuales entre ARENA y la coalición no permiten hacer afirmaciones concluyentes —en general la diferencia entre ambos oscila entre un 1 y un 4 por ciento—; a pesar de que un número significativo de los encuestados afirmaron no saber por quien votarían o afirmaron no tener preferencia por ninguno de los partidos —en promedio un 40 por ciento de la muestra total—; y pese que no es posible desestimar la probabilidad de que los resultados electorales finales difieran radicalmente de los obtenidos por las encuestas, es de consideración el hecho de esta ligera superioridad de la oposición frente a un partido que afirmaba poseer la victoria por adelantado y que se había dado el lujo de conducirse de acuerdo a ello.

Como quiera que sea, los resultados de estas encuestas no deberían sorprender a nadie, en especial si se toman en cuenta dos elementos. En primer lugar, la catastrófica gestión edilicia del partido ARENA: no sólo un número importante de sus alcaldes se vieron implicados en escándalos de corrupción, sino que el mismo partido, poniendo en duda su honestidad y credibilidad, usó todos los medios a su disposición para protegerlos y evitar que la justicia fuera capaz de alcanzarlos. En segundo lugar, complementando esta protección a los ediles, el partido ARENA no ha ocultado su intención de mantener a los mismos cuadros políticos en la lista de candidatos para las alcaldías, premiando así con el continuismo a una gestión que a los ojos de los ciudadanos ni ha sido eficaz ni ha sabido estar a la altura de sus necesidades y expectativas.

Por otra parte, el inicio de la campaña política para la elección de alcaldes tuvo como trasfondo dos hechos importantes: la acusación de que el FMLN estaba desviando fondos de organizaciones no gubernamentales para financiar su campaña y el hallazgo, el 9, de un lote de armas en la ciudad de Managua, Nicaragua, presuntamente pertenecientes a la organización de izquierda. Sobre lo primero, el 6, el partido ARENA denunció el desvío de fondos de parte de organizaciones no gubernamentales para la campaña del FMLN. El diputado René Figueroa, presidente de la juventud de ARENA, sostuvo que en la siguiente semana revelarían los nombres de las instituciones que realizan esas prácticas, penadas por la recién aprobada Ley de Organizaciones No Gubernamentales. "Sabemos que más de 250 mil dólares han venido del CISPES (Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador) y acordémosnos que el CISPES boicoteó las maquilas en nuestro país", explicó Figueroa, quien además aprovechó para señalar que unos 4 millones de dólares donados por la Unión Europea también habían sido invertidos en la campaña del FMLN. Ante esas acusaciones, el encargado de campaña del FMLN, Facundo Guardado, dijo que "entendemos que ellos están preocupados y nerviosos por las encuestas", desestimando así los señalamientos.

El 8, el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, sostuvo que un total de 17 organizaciones no gubernamentales, sospechosas de desviar recursos financieros y materiales a partidos políticos, son investigadas por el registro de asociaciones y fundaciones del ministerio a su cargo. Acosta Oertel dijo tener conocimiento que un grupo de organizaciones acudiría a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde presentará un recurso pidiendo se declare inconstitucional la ley que se refiere a ellas. "Eso es lógico — afirmó el funcionario—, porque les vamos a fiscalizar los fondos ya que hemos dicho que las organizaciones no gubernamentales son para llevar bienestar a las comunidades donde los programas de gobierno no han llegado".

El 10, el FMLN restó importancia a las acusaciones de ARENA sobre el uso de fondos de las organizaciones no gubernamentales. Según Orlando René Ayala, las acusaciones "son actos desesperados del partido ARENA y más del presidente Calderón, quien está tomando en cuenta las recomendaciones de sus asesores publicitarios, en el

sentido de que no hable de la situación económica porque duele demasiado, sino que recuerde el pasado y planee actos de injurias y calumnias contra el frente".

Finalmente, el 13, el Ministro Acosta Oertel presentó, ante la Fiscalía General de la República, una demanda por difamación en contra del jefe de campaña del partido FMLN, Facundo Guardado, quien días antes había manifestado que el Ministro importó al país varios automóviles sin pagar impuestos, valiéndose de su franquicia. Acosta sostuvo que las declaraciones difamatorias por parte de Guardado se produjeron luego de que su ministerio denunciara que en la campaña política del FMLN se estaban utilizando recursos de algunas organizaciones no gubernamentales. La prensa nacional consultó al Fiscal General sobre el caso y éste expresó no haber recibido una denuncia formal al respecto. Mientras tanto, Guardado mantuvo en pie sus declaraciones en contra del funcionario, y aseguró no temerle a un juicio. Asimismo, explicó que sus declaraciones, más que ser una acusación, tenían como propósito hacer un llamado de atención para que se investigara el caso, para lo cual se apoyó en información recibida de empleados del Ministerio de Hacienda.

En lo que se refiere al hallazgo de armas en Nicaragua, el 10, el subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua, Eduardo Cuadra, presentó a la prensa un arsenal de grandes proporciones que incluía más de tonelada y media de municiones para fusiles de distinto calibre. El buzón además contenía alrededor de 136 fusiles de diversos tipos y calibres y cartuchos de dinamita, 137 rollos de explosivos plásticos, 632 granadas de diferentes tipos, cordones de detonante, rollos de mecha lenta, minas antipersonales y lanzacohetes. Por su parte, el 11, el jefe del Ejército nicaragüense, Joaquín Cuadra, afirmó que existían serias sospechas de que el arsenal de guerra descubierto en su país hubiese pertenecido a la guerrilla de El Salvador.

Un día después, el partido ARENA acusó al FMLN de estar vinculado con el depósito de armas que fueron encontradas en la vivienda de Pilar Aguilar Loaisiga, un ex militar nicaragüense. El diputado de ARENA, Walter Araujo, no sólo afirmó que el FMLN estaba vinculado con la venta y tráfico de armas a nivel de Centroamérica, sino también de que no cabían dudas sobre el involucramiento del FMLN. Sin embargo, el diputado del FMLN, Gerson Martínez, desmintió cate-

góricamente las acusaciones de Araujo y las atribuyó a la total decadencia que sufre el partido de gobierno, al tiempo que las enmarcó dentro de una actitud de paranoia y desesperación.

No obstante, el 19, el FMLN y el Partido Demócrata se enfrascaron en un debate legislativo que puso en la mesa de discusión el tema de la comercialización de armas por la guerrilla, el ocultamiento de arsenales para garantizar una desmovilización honorable a jefes guerrilleros y la incertidumbre acerca del origen de los fondos para la campaña política del FMLN. Todo comenzó cuando el Partido Demócrata Cristiano solicitó al pleno la conformación de una comisión para investigar la venta de armas por parte del FMLN para financiar su campaña política, ya que, según la diputada Rosa Mérida Villatoro, el responsable de la campaña del FMLN, Facundo Guardado, había declarado públicamente que su partido disponía de 30 millones de colones, aunque luego se retractó diciendo que sólo contaban con 12 millones. Villatoro atribuyó el cambio de cifras a la dificultad que enfrentaría el FMLN para justificar la procedencia de la millonaria suma, porque la deuda política a la que tiene derecho asciende a 6.9 millones de colones.

Por su parte, la diputada del Partido Demócrata, Ana Guadalupe Martínez, no sólo observó que no se podía descartar que la suma de dinero inicialmente divulgada por Guardado fuese producto de la venta de armas, sino que instó al resto de partidos a impedir que se pusiera en riesgo el sistema democrático. Mientras tanto, miembros del FMLN calificaron de inmoral al Partido Demócrata, recordando que cuando el diputado Francisco Jovel acudió ante las autoridades de México a decir que el FMLN no tenía misiles resultó que el Ejército Revolucionario del Pueblo ocultaba un arsenal para venderlo; al mismo tiempo, el diputado Jovel acusó al Partido Demócrata de haber impulsado el asesinato de alcaldes durante la guerra.

La reacción de los miembros de este último partido no se hizo esperar, siendo Juan Ramón Medrano quien replicara que fue la comandancia general del FMLN, presidida por Schafik Handal, Francisco Jovel y Salvador Sánchez Cerén la que ordenó el asesinato de alcaldes. Asimismo, los miembros del Partido Demócrata aceptaron que después de la firma de los acuerdos de paz ocultaron misiles para tenerlos como "un as bajo la manga", contando con el consentimiento de Alvaro de

Soto, representante del Secretario General de Naciones Unidas. Los misiles —aseguraron— fueron entregados después que se garantizó una reinserción honrosa a más de 600 mandos medios de la guerrilla.

Entre tanto, los diputados de ARENA, quienes no podían ocultar su gozo ante el debate protagonizado por los ex guerrilleros, no perdieron oportunidad para lanzar una iniciativa que les permitiría hacer propaganda contraria al FMLN con fondos del Estado: obtener el respaldo de la Asamblea Legislativa para que autorizara a la junta directiva editar el debate parlamentario y publicarlo en los medios de comunicación. La iniciativa fue avalada con 48 votos, y de ese modo el país entero pudo darse cuenta cómo los antiguos aliados militares se hacían trizas políticamente.

Por su parte, Naciones Unidas, a través de un comunicado fechado el 20 de febrero, hizo pública la reacción de Alvaro de Soto en relación a su conocimiento de los misiles que quedaron en poder del Ejército Revolucionario del Pueblo y de la Resistencia Nacional después de la firma de los acuerdos de paz. Según el comunicado de Naciones Unidas, "el señor de Soto, actualmente subsecretario general para asuntos políticos de las Naciones Unidas, quien representó al Secretario General en las negociaciones que condujeron a los acuerdos de paz, desmiente categóricamente el haber dado su consentimiento para que el FMLN retuviera misiles o cualquier otra arma en contravención de los acuerdos de paz, y el haber participado en negociación alguna tendiente a la venta de éstos".

Por último, el 22, el presidente Calderón sostuvo que presentaría una protesta formal ante Naciones Unidas por el hallazgo de las armas y buscaría una "condena moral" para el FMLN por parte del organismo internacional. Un día antes, el jefe del ejército de Nicaragua, Joaquín Cuadra, confirmó que las armas encontradas en Managua pertenecieron al FMLN. "Hemos prácticamente confirmado que los propietarios originales de este buzón de armas encontrado por la policía nacional eran guerrilleros salvadoreños", sostuvo Cuadra. Sin embargo, las afirmaciones de este último fueron relativizadas por el encargado de prensa de las Fuerzas Armadas de ese país, Aníbal Calero, quien dijo que "se presume que las armas son de origen salvadoreño. El general Cuadra enfocó el problema de los buzones de armas que se presume existen todavía

en el país y que vamos a actuar directamente para dar con ellos”.

En definitiva, los meses de enero y febrero han sido escenario de un ambiente político sumamente enrarecido. Inicialmente, la campaña se caracterizó por una propaganda deficiente en contenidos y tendiente a la polarización; luego, algunas decisiones sesgadas del Tribunal Supremo Electoral pusieron en duda su credibilidad; a ésto hay que añadir la difusión de una encuesta falsa —atribuida al Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)—, lo cual puso en riesgo el prestigio de instituciones serias y confiables que se dedican a investigar la opinión pública. Y ahora un nuevo fenómeno amenaza con perpetuar la mala reputación del quehacer político: las declaraciones y

acusaciones apresuradas e infundadas. En el editorial de *Proceso*, edición 746, se dice que la campaña electoral se asemeja a “una guerra sin cuartel” que admite cualquier medio para “derrotar al enemigo”. La actual coyuntura de la política salvadoreña da razón a esa apreciación. Tal vez algunos políticos de nuestro país han confundido democracia con competencia desleal. Así, cualquier cosa puede ser dicha sin importar si está destinada a calumniar o difamar a personas o instituciones. Es decir, asumir con responsabilidad lo que se expresa en público no tiene importancia. Quizá nuestros políticos no se han dado cuenta de que esa falta de seriedad no solo no contribuye en nada a la democracia, sino que favorece el descrédito que ante la ciudadanía ha adquirido la clase política.

